



Contraloría General de la República

División de Coordinación e Información Jurídica

Dictamen

033549N03

Texto completo

N° 33.549 6-VIII-2003

Se ha solicitado un pronunciamiento respecto de la legalidad del contrato celebrado entre la Municipalidad que indica y las empresas Aguas Andinas S.A. y Ecoriles S.A., sancionado por el decreto alcaldicio correspondiente.

Dicha convención, de fecha 24 de mayo del año 2002, establece, por un plazo de doce años prorrogable en las condiciones que indica, que el municipio, en su calidad de prestador del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), se obliga, en lo que interesa, a realizar el servicio de transporte de los residuos industriales líquidos orgánicos (riles) que se indican, provenientes de las industrias emplazadas en el área de concesión de dicho Servicio, hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Trebal, de propiedad de Aguas Andinas S.A., la que se obliga a pagar por ello la suma única, por toda la duración del contrato, de \$ 674.500.000.

Además, en el mismo contrato, la empresa Ecoriles S.A., que tiene como parte principal de su objeto social el prestar servicios en el área de tratamiento de residuos líquidos industriales, se obliga a actividades de apoyo funcional de monitoreo, caracterización y evaluación de los riles descargados en las redes de alcantarillado del territorio operacional del nombrado servicio municipal. Por este servicio el municipio pagará el precio que se determina según lo señalado en el anexo N° 1 de la convención, excluyéndose de responsabilidad de cualquier especie por eventuales daños o defectos de cualquier clase en el funcionamiento que sufra la nombrada planta de tratamiento.

Sobre el convenio en estudio, la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha informado que en dicho contrato no se ha acreditado infracción a la legislación que constituye el ámbito de competencia de esa entidad fiscalizadora. Empero, manifiesta dudas en cuanto a si el municipio procedió lícitamente a la enajenación de parte del patrimonio municipal

Al respecto, cumple manifestar que el DL. N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, dispone, en su artículo 10° - modificado por Ley N° 19.388 - : "Las Municipalidades que tengan a su cargo la explotación del servicio de agua potable, se ajustarán en todo a las disposiciones que, sobre el particular, rijan para la explotación de dicho servicio."; y "Las empresas de agua potable de que las municipalidades sean propietarias o tengan participación, se administrarán autónomamente y se sujetarán al régimen legal aplicable a las empresas privadas del ramo".

Cabe señalar que la expresión "empresa" que utiliza este último acápite debe interpretarse en forma amplia y comprende a las empresas municipales organizadas como sociedades y a las unidades municipales que presten el servicio. (Dictamen N° 2.111, de 1997).

Conforme a la jurisprudencia citada, el actual texto del artículo 10° del DL. N° 3.063 tiene el claro objetivo de que todas las entidades que explotan el servicio de agua potable tengan el mismo tratamiento en su operación y, en particular, que no existan diferencias establecidas en razón de la calidad de ente público que reviste el organismo que ya sea por sí mismo o a través de su participación en entidades dedicadas al rubro intervenga en la actividad.

De lo que se trata, consecuentemente, es que las Municipalidades compitan en igualdad de

condiciones con el sector privado.

De ello se sigue, por tanto, que la explotación de servicios sanitarios realizada por los Municipios se regula por la misma normativa aplicable a los particulares, sin que se apliquen las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades u otras que regulen a los municipios, en su calidad de órganos públicos, a menos que se refieran expresamente a su carácter de prestadores de los indicados servicios.

En lo atinente a la eventual enajenación de bienes municipales a través del contrato antes referido, debe precisarse desde luego que las obligaciones que asume el municipio en caso alguno importan desprenderse de la propiedad de sus instalaciones, dado que, como se ha dicho, se refieren a autorizar descargas a través de la infraestructura municipal prevista al efecto, sin que ello implique alteración del dominio sobre dichas redes ni modificación de las funciones de la Corporación Edilicia en cuanto concesionaria.

En mérito de lo expuesto, se concluye que el contrato al cual alude la consulta formulada se ajusta a derecho.